

Nota editorial

A la espera de los análisis postelectorales detallados que permitan conocer cómo han evolucionado las corrientes de voto desde el pasado mes de diciembre y a qué han obedecido los desplazamientos que han tenido lugar, las elecciones del pasado día 26 de junio se prestan a reflexiones complementarias según se considere el corto, el medio o el largo plazo. Reflexiones que, como es lógico, incorporan mayores dosis de incertidumbre a medida que se desplazan en ese horizonte temporal.

En el corto plazo destacan la victoria del Partido Popular, que ha conseguido un avance de indudable valor político respecto a los malos resultados de diciembre del pasado año, y la resistencia del PSOE ante el avance de Podemos, dentro de un escenario de desorientación y de fractura de la izquierda, exacerbado desde el mismo día 27. Sin duda, estas fueron las dos grandes y buenas noticias de la noche electoral y alrededor de ellas han girado las reflexiones que se han realizado en las últimas semanas. El hecho de que la campaña se polarizara alrededor de la amenaza de reversión del proceso político desarrollado en España desde 1976, unido, quizás, al impacto del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a sus primeros efectos económicos, situó la disputa electoral en el territorio menos propicio a quienes pretendían desafiar simultáneamente el *statu quo* dentro de la izquierda y en el conjunto del sistema. Afortunadamente, ninguno de esos desafíos llegó a consumarse.

No es incompatible el hecho de que el Partido Popular, incluso con la apreciable ganancia en escaños, quede aún lejos de una mayoría suficiente y que, sin embargo, haya reforzado su condición de primera fuerza política aumentando su distancia sobre el Partido Socialista. Si lo primero exige negociación y acuerdos para gobernar, lo segundo habilita a Mariano Rajoy para promover esos pactos de gobierno como líder del Partido Popular.

Una vez apurada la sensación de alivio por el hecho de que no llegaran a materializarse ni el nuevo debilitamiento del PP ni el adelantamiento de Podemos al PSOE que anunciaban las encuestas, es preciso concentrarse en las limitaciones que persisten para la gobernación de España debidas a la fractura del espacio electoral que hasta hace poco ocupaba en solitario el Partido Popular así como la radicalización del espacio de la izquierda, que no ha alcanzado en esta ocasión su movilización potencial.

Una fractura y una radicalización que al sumarse a los cambios de fondo que vienen operándose en el comportamiento electoral español desde hace años, llevan al país a un estado casi de bloqueo institucional en los dos ejes clave de la disputa política. La polarización ha adquirido la forma de una separación cada vez mayor entre la izquierda y la derecha, y también la de una deriva divergente en algunos subsistemas de partidos regionales fundamentales. Esas brechas coinciden básicamente, además, con otras de orden socioló-

gico –edad, formación, posición en el mercado laboral, canales de información, acceso a los recursos del sistema de bienestar–, lo que indica que probablemente serán duraderas y complica aún más la tarea de elaborar políticas integradoras verdaderamente nacionales que reviertan los procesos de dualización que España padece en la educación, en el mercado laboral y en el acceso a los beneficios del sistema de bienestar, entre otros.

Las posibilidades de formar gobierno, y un gobierno que disponga del respaldo y de la estabilidad necesarias para desplegar una agenda reformista ambiciosa, requieren revertir los efectos de esa polarización. La polarización no solo empobrece el espacio electoral potencial y desfigura los debates de fondo hasta impedir cualquier progreso en su clarificación, sino que eleva artificialmente las expectativas de uno y otro campo en disputa hasta el punto de hacer inevitable un reajuste postelectoral a la baja que necesariamente genera frustración y desafección. A una escala aún mayor, esto es lo que se puede constatar hoy ya en el Reino Unido.

Estas limitaciones de medio plazo, que pueden prolongarse por un tiempo, probablemente dejarán

sentir sus efectos en el largo plazo, entendiendo por tal el que se inicie con la toma de posesión del nuevo Gobierno, en el caso, muy deseable, de que el comportamiento de los actores políticos no des-emboque en unas nuevas elecciones.

No se debe permitir que los problemas estructurales de orden económico, administrativo e institucional, unidos a la incertidumbre europea, se acerquen a un punto crítico. Bien al contrario, después de este largo periodo de política en funciones, España aterriza en una realidad que junto a datos claramente positivos como la progresión en el empleo y el mantenimiento del crecimiento, ofrece otros que necesitan respuestas ya inaplazables. Está abierto el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y no se puede perder de vista el cumplimiento de los objetivos de deuda y déficit. A lo anterior se añaden las dudas sobre el compromiso de fondo de algunos países con el marco político y financiero del que se beneficia España; así como los problemas políticos que el nacionalismo, el populismo y la violencia terrorista llevan años planteando a las sociedades abiertas, sin que haya sido posible hasta ahora situar esa confrontación en un escenario que asegure su fracaso. ■